ACUDE EN CONDICION DE PROFESIONAL EN ABOGACIA DEBIDAMENTE MATRICULADO. MATRICULA `PROFESIONAL ACTIVA. FIRMA DIGITAL VALIDADA EN EL SITIO OFICIAL LEX 100. SOLICITA AUTORIZACION. EN DEFECTO SE CURSE COPIA DE LA PRESENTE A LA DOCTORA CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

TOCF nro. 2

Expediente judicial nro.CFP 5048/2016/T01

“FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Cristina Elisabet y otros s/ inf. arts. 173, 174 y 210 del Código Penal”.

1. Tengo el honor de dirigirme a V.E. en mi carácter de simple ciudadano, titular del Documento Nacional de Identidad número 11.371.779 con domicilio real en la calle Eliseo Reclus 890, Provincia de Buenos Aires, y domicilio profesional en la calle Montevideo 1562, piso 8, oficina “C” CABA (guilletisco@hotmail.com) (celular de contacto 1127630730) y domicilio electrónico 20113717794 (**con firma digital validada en el sitio oficial Lex 100**) a efectos de solicitar se contemple la posibilidad de conceder una autorización para visitar a la doctora Cristina E. Fernández de Kirchner en el domicilio donde actualmente la nombrada cursa detención domiciliaria en virtud de haber recaído en su respecto sentencia de condena firme de cumplimiento efectivo y pasada en autoridad de cosa juzgada. **Se aclara que quien suscribe registra firma digital validada en el sitio oficial Lex 100.**

2. Motiva esta solicitud el deseo de expresar, y de ser posible en persona, una muestra demás que sincero agradecimiento dirigido en este caso a la doctora Cristina Fernández de Kirchner lo cual se motiva en múltiples razones que a renglón seguido de explicitarán.

3. Para el hipotético caso que V.E llegara a considerar improcedente la presente solicitud ruego se evalúe la opción de cursar copia digital de la presente a la misma doctora Cristina Fernández de Kirchner para su conocimiento.

4. Para adecuada ilustración de Vuestro elevado criterio – y sujeto a Vuestra potestad jurisdiccional- en prieta síntesis brindaré un enunciado meramente ejemplificativo – y no precisamente taxativo- respecto de las verdaderas razones que me han decidido a concitar la atención de V.E. no obstante el caudal de tareas que marca la agenda de trabajo del Excmo. Tribunal.

5. Así a título de ejemplo he de reproducir alguna de dichas razones, a saber: i) ***“ Hay que inventar denuncias, hay que salir a apretar a los jueces” (imperdible diálogo mantenido entre la Vicepresidente doctora Cristina Fernández de Kirchner y el Senador Nacional doctor Oscar Parrilli)*** “ ii) ***“ Sabemos que dio un buen examen para ascender a camarista pero Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada, lo vamos a echar” (Consejera doctora Diana Conti, 20/07/07);*** iii) ***“Te***

metiste con Delconte y los radicales no te la perdonan; procesaste a Parino, y a los Macri, Cavallo te la va a seguir a muerte y ahora te metiste con Garre en pleno apogeo del kirchnerismo ; Guillermo ya está, date por echado” (Horacio Artabe , fallecido juez nacional en lo Penal Económico); iv) “Venimos a acusar por mal desempeño a un juez aplicado, memorioso e inteligente”(Consejera doctora Diana Conti, 19/11/07, Jurado de Enjuiciamiento); v) “Doctor Mosca, lo saluda el doctor Alberto Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros, lo llamo para felicitarlo por sacar a una manzana podrida como Tiscornia de la Justicia argentina” (9/08/2007); vi) “ Doctor Sal el Jurado no va a concederla postergación del debate; esto es un tema político la decisión está tomada a su cliente lo van a destituir” (liviana afirmación del Secretario doctor Marcelo Bobá, en la misma Mesa de Entradas del Jurado de Enjuiciamiento en ocasión de atender en persona al doctor Sebastián Sal en fecha aproximada al 29/10/07);vii) “ El Consejo de la Magistratura es el botín de la política y el caballo de Troya de la Justicia” (profesor doctor Alberto Bianchi, Seminario, Universidad Católica Argentina, Infobae 3/09/2020) (<https://www.infobae.com/politica/2020/09/03/jueces-y-juristas-debatieron-sobre-como-debemodificarse-el-funcionamiento-de-la-corte/>; vii) Dos editoriales del periodista Carlos Pagni de La Nación referidas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura , a saber: “El “indulto” a Canicoba Corral, bajo la sombra de un pacto del 13 de mayo de 2020”, y “Se reactiva un viejo pacto para nombrar jueces amigos del kirchnerismo” “Fisuras en el bloque opositor del Consejo de la Magistratura” (18/12/2020) no hacen mas que reafirmar la opinión del profesor doctor Alberto Bianchi.

6. Despojados de todo deseo de agotar innecesariamente la atención de V.E. se estima deviene inevitable dar un adecuado contexto a esta presentación el cual no hará mas que abastecer la solidez de los motivos que sustentan esta petición motivos los cuales no han podido pasar desapercibidos para la doctora Cristina Fernández de Kirchner dada su extensa trayectoria en la arena de la política.

7. Veamos: “Yo no amenazo, solo digo que si Parino va preso el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia”, Revista Noticias, 30/11/96): o similar –acompañada de un incontrovertible tono gangsteril cuando el doctor Cavallo espetaba:” ¿Holá? ¿ Anzorreguy?. Habla Domingo Cavallo; decile a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económico no libera a Parino salgo a hablar y volteo al gobierno” (Diario Clarín, Julio Blanc, 22/12/96).

8. Y no sería esa la única muestra ilustrativa de una inmunda y pestilente dirigencia política argentina; por cierto que no; se recuerdan simultáneas crónicas periodísticas de fecha 8 de julio del año 1998 (Clarín “La Justicia le dictó diez años de prisión al radical Delconte”; (La Nación “ Aduana: condenan a diez años de prisión a Juan Carlos Delconte”).

9. Y tan es así que se recuerdan declaraciones públicas formuladas por el entonces adlater del doctor Domingo Cavallo; esto es, el por entonces Diputado Nacional (Acción por la República) Guillermo

Franco (“ Con este fallo oportunista el juez Tiscornia busca blanquear su imagen y así esquivar el juicio político”).

10. Y en la misma línea se expresaba públicamente uno de los conmlitones del condenado Delconte; me refiero al Diputado Nacional Melchor Gruchaga exhibiendo claras ínfulas revanchistas.

11. Y como nota de color –y para destacar- la crónica de la señora periodista Paz Rodríguez Neill (“ El juez Tiscornia contra atacó en el inicio del juicio político”, La Nación 20 de noviembre del año 2007, Paz Rodríguez Neill).

12. Y otro motivo muy especial para expresar en persona mi agradecimiento en virtud de las diatribas propaladas en mi respecto por la doctora Cristina Fernández de Kirchner reconoce anclaje en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 9 de diciembre del año 2015 por el cual se hubo dictado un auto de sobreseimiento total y definitivo respecto de quien suscribe pronunciamiento en el cual –además- incluyó todas las declaraciones de la ley.

13. A lo que se agrega el contenido del informe de admisibilidad n°34/18 emitido con fecha 4/05/2018 por la Comisión Americana de Derechos Humanos (CIDH) (“Tiscornia, Guillermo Juan y Familia c/ República Argentina).

14. Que -de otra banda y respecto de lo que constituye la esencia misma de la actividad abogadil- cabrá referir que desde el punto de vista deontológico la corrección profesional se especifica en una compleja serie de comportamientos inspirados en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbre (Rosenkranz-Caivano-Mayer, “Ética profesional de los abogados”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995, pág. 75) (del voto del juez BUJÁN, cons. IX 23.446/03) “Bianchimano, Sergio Gabriel c/ CPACF (expte. 14.902/02)”.Fecha: 28/07/2005 C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala I, Buján, Licht.

15. Asimismo cabe agregar que la diligencia del abogado, importa la premura, el celo, el interés, la escrupulosidad, el cuidado, la atención y otros aspectos que afloran de cuando en cuando bien en la ejecución técnica de las prestaciones, bien en todos los comportamientos que la rodean, que son del dominio de la deontología y que adquieren relevancia sobre todo en las obligaciones de hacer (sala I “Balbín,Claudia Patricia c/ CPACF”, 7/5/02) (cons. 7). 45.954/03 “Rossetti Adalberto Eraldo y otro c/ CPACF”.Fecha: 24/05/2005 C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala III, Grecco, Argento.

16. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido constante al señalar que las “garantías judiciales” del artículo 8 se refieren a las exigencias del debido proceso legal, así como al derecho de acceso a la justicia. Así, en un primer momento, en atención a lo desarrollado en la Opinión Consultiva OC-9/87, la Corte afirmó que el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, entendido éste como “[el] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”.(Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 27; Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, op. cit., párr. 69,y Caso Nadege Dorzema y otros

vs. República Dominicana. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 156).

17. De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales – también conocidas como garantías procesales–, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, (Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, op. cit., párr. 147, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 80). es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.(Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87, op. cit., párr. 28, y Caso Mohamed vs. Argentina, op. cit., párr. 80).

18. De acuerdo con el Tribunal, “[l]os principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos”. (Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002.Serie A No. 17, párr. 115). Asimismo, el Tribunal ha destacado que el artículo 8 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual, entendido por la propia Corte como una “norma imperativa de Derecho Internacional”,(Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.Serie C No. 153, párr. 131.) no se agota ante el hecho de que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo.(Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 188).

19. A partir de ello se desprende que “los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos”. Así por ejemplo, de acuerdo con la Corte, “[c]ualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia”, debe entenderse contraria al artículo 8 de la Convención.(Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina, op. cit., párr. 50.).

20. En el mismo sentido, el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas”.(Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No.104, párr. 79, y Caso Mohamed vs. Argentina. op. cit., párr. 83).

21. Desde otro mirador cabrá referir – a modo de referencia conceptual- que el abogado es un genuino magistrado social, cuya labor cobra subida trascendencia social; art.5 de la ley 23.187 autoriza la actuación del órgano de superintendencia oficial –CSJN- cuando se vea afectado el prestigio de un abogado y el respeto que se le debe como tal.

22. En Francia y Bélgica el abogado recibe el trato de "maitre" y como señala J. Des Cressonnieres ninguna subordinación le debe el Foro a la Magistratura, ya que las funciones son equivalentes; la Magistratura le debe respeto al Foro y viceversa.

23. La actividad abogadil está revestida de formalidad, de pasión, de elocuencia, pero también de penetración intelectual y de estudio sereno, la abogacía supone condiciones de carácter y espíritu aguerrido, discurso claro y análisis certero (Jean Appleton).

24. Cualquier intento de menoscabar la jerarquía de la profesión jurídica revela desde ya una óptica socialmente destructiva y si se quiere anti histórica.

25. Contradictor de las malas causas, auxiliar imprescindible de la justicia, intercesor de los necesitados, el abogado insistirá en aquello que cree legal y verdadero. Y tal es que lo se verifica en este caso.

26. Desde esta perspectiva cabrá agregar que la garantía judicial consagrada en el art.8, ap 2, inc. F) PIDCP en función del art.14. e) consagra el principio genérico de proposición de prueba y " que no se agota en los medios expresamente mencionados. La facultad abarca la propuesta de cualquier evidencia que sea útil para el esclarecimiento del caso dentro del amplio margen de la libertad probatoria" (cfr. "Garantías del imputado, prólogo de Ricardo Luis Lorenzetti, Abel Fleming, Pablo López Viñals, pag. 239, Rubinzal-Culzoni, Editores, 2008).

27. En línea la CIDH ("Catillo Petruzzi c/ República del Perú) expresó que: "calificar la actuación del abogado defensor durante el proceso resulta ajeno a facultades del juez puesto que ello atentaría contras la libertad e independencia en el ejercicio de la defensa e implicaría una injustificada superposición entre el rol del juez y del defensor (cfr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy , sentencia del 28/04/06 "Zenteno, Emma, L.L. NOA 2007 (marzo).

28. "No puede restringirse la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones ("El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos" (María Fernanda López Puleio).

29. "Los defensores deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Tampoco sufrirán ni estarán expuestos a persecuciones administrativas, económicas o de otra índole,... Y cuando la seguridad de los abogados sea amenazada como consecuencia del ejercicio de sus funciones, deben recibir garantías y protección adecuada de parte de las autoridades" (CDHNU , Comentario General 13, ciit, párrafo 9, Principios Básicos sobre la Función de los Abogados(("Tibi vs. Ecuador",7/09/04, voto del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 9).

30. "El defensor representa mucho para quienes reciben todo el peso del poder penal estatal. No debemos olvidar –parafraseando a Calamandrei- que para las personas simples, las razones asumen una fuerza irresistible cuando se imponen por la autoridad o están escritas en papeles con membretes; y que la función de los abogados también será impedir, que en nombre del sacro terror a los tribunales, los que deban atravesar instancia, se dejen sacar hasta la camisa" ("Calamandrei, Piero, "Ill proceso como gioco, en Revista di dirittoprocessoale, vol. 5, parte I, Cedam, Padua , 1950, p. 23-51).

31. Ruego, en consecuencia, de V.E. evalúe la opción de conceder la autorización requerida y, en defecto, se ordene remitir copia digital de la presente para conocimiento de la doctora Cristina E. Fernández de Kirchner.

32. Por último no escapará al elevado criterio de V.E. que se trata -en este caso- del mejor legado que, en vida, podré dejarle a mi núcleo familiar directo

33. Se provea entonces de conformidad que;

SERA JUSTICIA

Guillermo J. Tiscornia

Abogado

T°19 F°257

CPACF

20113717794

Firma digital validada en el sitio oficial Lex 100